

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, cuatro (04) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE	: JUAN DE JESÚS CARMONA GALLEG0
DEMANDADO	: COLPENSIONES Y MINISTERIO DEL TRABAJO
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO (AUTO)
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-012-2022-00087-01
RADICADO INTERNO	: 310-23
DECISIÓN	: REVOCA AUTO.
ACTA NÚMERO	: 336

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a resolver el recurso dentro del proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

ANTECEDENTES

La parte demandante instauró proceso ordinario laboral pretendiendo se declare que tiene derecho al reconocimiento de la pensión especial de invalidez para víctimas del conflicto armado – prestación humanitaria periódica para personas víctimas del conflicto interno, por pérdida de la capacidad laboral de origen común conforme a lo establecido en Ley 418 de 1997, modificada por el artículo 18 de la Ley 782 de 2002. Y se condene a la Nación MINISTERIO DE TRABAJO y FIDUAGRARIA S.A. a través de Colpensiones al pago de dicha pensión a partir del día de la solicitud y hacia futuro en forma vitalicia, teniendo en cuenta los incrementos anuales que establece la ley para las pensiones, con el retroactivo, los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, y las costas del proceso.

En la contestación de la demanda, el Ministerio del Trabajo solicitó como pruebas las siguientes:

“OFICIAR a la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN** para que allegue un **informe**, de acuerdo al artículo 275 del Código General del Proceso,

con el fin de que remita la investigación criminal de los presuntos hechos ocurridos el día 1° de noviembre de 1984, en REMEDIOS – ANTIOQUIA (Antioquia), que terminaron con las lesiones sufridas por el señor JUAN DE JESÚS CARMONA GALLEGO (C.C. 71.081.093).

OFICIAR a la UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS para que remita las consideraciones y/o pruebas que se tuvieron en cuenta para expedir la resolución de inclusión en el Registro Único de Víctimas al señor JUAN DE JESÚS CARMONA GALLEGO (C.C. 71.081.093). Así como para que aclare si dicha inclusión se hizo bajo el principio de buena fe, contemplado en el artículo 5 de la Ley 1448 de 2011”.

Dentro de la diligencia de que trata el artículo 77 del C.P.T y S.S, el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, en la etapa del decreto de pruebas, negó la solicitud de pruebas realizada por el Ministerio del Trabajo argumentando para ello que conforme a lo dispuesto en el artículo 173 del código general del proceso que señala que el juez se abstendrá de decretar la práctica de las pruebas que directamente o por medio de derecho de petición hubiere podido conseguir la parte que la solicita, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, caso en el cual deberá acreditarse sumariamente, y en razón de ello indicó que para el caso bajo estudio el Ministerio del Trabajo no se acreditó sumariamente siquiera que se haya solicitado dicha información a la Fiscalía General de la Nación ni a la Unidad de Víctimas, por lo que consideró que no era procedente el decreto de dichas pruebas.

RECURSO DE APELACION

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de la Nación, Ministerio del Trabajo interpuso recurso de apelación manifestando en síntesis que es imprescindible solicitar que se oficie a la Fiscalía General de la Nación para que remita investigación sobre los hechos ocurridos al señor Juan Carmona Gallego el 20 de octubre de 1984 teniendo en cuenta que dicha información es indispensable para determinar si las lesiones sufridas fueron en el marco del conflicto armado tal como se menciona en el artículo 2.2.9.5.5 del decreto 600 de 2017, que exige acreditar el dictamen ejecutoriado de pérdida de capacidad laboral expedido por la junta de calificación donde se evidencie una pérdida del 50% o más de su capacidad laboral, y además que se demuestre el nexo causal del acto de violencia suscitado. Así mismo indica que también es un requisito específico dentro del numeral 04 del artículo 2.2.9.5.3 del decreto 600 de 2017, y que por ello es indispensable que la fiscalía remita dicha investigación, pues indica que para oficiar a la fiscalía se necesita el auto o el acta de la audiencia para anexarla y así dicha entidad remita la información

pues al no ser el Ministerio del Trabajo parte dentro de los hechos ocurridos en el año 1984 no tendría la facultad para solicitar dicha información. Por lo anterior solicita se revoque la providencia de primera instancia y se acceda a al decreto de pruebas solicitada.

En virtud de lo mencionado el juez concede el recurso de apelación

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado de Colpensiones indica que se deben de cumplir dos requisitos para tener derecho a la prestación reclamada, esto es, ser víctima del conflicto armado, y sufrir una pérdida de capacidad laboral del 50%, y que si la parte accionante logra acreditar en el proceso judicial el cumplimiento de las dos condiciones anteriormente descritas, podrá reclamar de la entidad oficial que señale el gobierno nacional el reconocimiento y pago de la prestación económica sin que ello suponga la acreditación de requisitos o condiciones adicionales por el afiliado. Que por lo anterior de encontrar en el plenario prueba suficiente para acreditar las condiciones anteriormente mencionadas, se hace innecesario el decreto de otras adicionales que en poco o nada nutren a la ilustración judicial.

El apoderado de la parte demandante, indica que se debe tener en cuenta lo establecido en el artículo 173 del CGP, según el cual el juez se abstendrá de decretar cualquier prueba que la parte hubiese podido conseguir por derecho de petición, y que por lo tanto en el régimen del CGP, el juez se abstendrá de decretar pruebas tendientes a la obtención de documentos que las partes pudieron, previo al inicio de la contienda o a la actuación procesal, adquirir directamente o por la vía del derecho de petición, el que todo caso, se regulara por las previsiones de la Ley 1755 de 2015.

Que, partiendo de lo anterior en el presente proceso, la entidad demandada en ningún momento ejerció un derecho de petición ante las entidades que hoy en día desea que el juez oficie

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Para resolver, es de resaltar que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad con el Artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los Artículos 29 y 35 de la Ley 712 de 2001,

que modificaron los Artículos 65 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente, entendiendo que las partes quedaron conformes con lo resuelto de más en la primera instancia.

Se centra el problema jurídico en determinar si para el caso bajo estudio se debe o no decretar los oficios solicitados a la fiscalía general de la Nación y a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Por lo anterior el problema jurídico se resolverá en el siguiente orden.

Requisitos de la contestación de la demanda y el decreto de pruebas.

Para el presente caso es procedente el estudio del recurso de apelación al tenor de lo consagrado en el numeral 04 del artículo 65 del C.P.T y S.S que consagra como autos apelables, “*el que **niegue el decreto** o la práctica de una prueba*”.

Respecto a la forma y los requisitos de la contestación de la demanda establece el artículo 31 del C.P.L lo siguiente:

“ARTICULO 31. FORMA Y REQUISITOS DE LA CONTESTACION DE LA DEMANDA. La contestación de la demanda contendrá:

- 1. El nombre del demandado, su domicilio y dirección; los de su representante o su apoderado en caso de no comparecer por sí mismo.*
- 2. Un pronunciamiento expreso sobre las pretensiones.*
- 3. Un pronunciamiento expreso y concreto sobre cada uno de los hechos de la demanda, indicando los que se admiten, los que se niegan y los que no le constan. En los dos últimos casos manifestará las razones de su respuesta. Si no lo hiciere así, se tendrá como probado el respectivo hecho o hechos.*
- 4. Los hechos, fundamentos y razones de derecho de su defensa.*
- 5. La petición en forma individualizada y concreta de los medios de prueba, y**
- 6. Las excepciones que pretenda hacer valer debidamente fundamentadas.*

PARÁGRAFO 1o. La contestación de la demanda deberá ir acompañada de los siguientes anexos:

- 1. El poder, si no obra en el expediente.*
- 2. Las pruebas documentales pedidas en la contestación de la demanda y los documentos relacionados en la demanda, que se encuentren en su poder.*

3. *Las pruebas anticipadas que se encuentren en su poder, y*

4. *La prueba de su existencia y representación legal, si es una persona jurídica de derecho privado.(...)*

Partiendo de lo mencionado, sea lo primero indicar que, en el proceso laboral, las exigencias de saneamiento deben estar orientadas a la protección del proceso **y a que prevalezca el derecho sustantivo sobre el adjetivo**, sin que lo anterior implica que se pueda admitir cualquier demanda, sin que se cumplan los requisitos exigidos por el artículo 25 del CPTSS.

En concordancia con lo anterior debe advertirse que la CSJ en sentencias CSJ SL 532-2013, SL 15864-15 que remite a la sentencia SL 5482-14, entre otras, ha reiterado, **el deber y la facultad del juez de apreciar e interpretar la demanda**, al sostener en forma expresa la última de las sentencias invocadas:

*“Pues bien, para comenzar importa precisar que, conforme a la Constitución y la Ley, **los jueces se encuentran investidos de la facultad de interpretar la demanda y calificar jurídicamente los hechos debatidos en el proceso** (iura novit curia).*

*Así se predica del artículo 230 CN cuando señala que los jueces en sus providencias solo se someten al «imperio de la ley»; también de los artículos 229 CN y 2º de la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de la Administración de Justicia” que **garantizan el derecho de acceso a la administración de justicia**, cuyo matiz principal es que a los asociados se les ofrezca una solución efectiva y de fondo a los conflictos que hayan puesto a consideración de la jurisdicción, labor que deben realizar los jueces conforme al ordenamiento jurídico que se presume conocen.” (Resalto fuera del texto).*

Partiendo de lo anterior para el caso bajo estudio se tiene que lo pretendido en la demanda es la pensión especial de invalidez para víctimas del conflicto armado, por contar con una pérdida de capacidad laboral del 66.25%, ocasionada según lo descrito en el hecho segundo de la demanda por hechos ocurridos el, *“20 de octubre del año 1984 donde fue víctima directa del conflicto armado colombiano, recibiendo unos impactos de proyectil, dejándole unas secuelas de lesión medular en la región torácica alta, lo que ocasionó la pérdida de la sensibilidad, en los dedos de la mano, paraplejia de miembros inferiores que ocasiona perturbación funcional para caminar, así mismo la micción, defecación y sensibilidad”*.

Respecto a la prestación mencionada debe decirse que la ley 418 de 1997 en el título segundo que trata de la atención a las víctimas de hechos violentos que se susciten en el marco del conflicto armado interno señala en el artículo 15 que se entiende por víctimas aquellas personas de la población civil que

sufren perjuicios en su vida, grave deterioro en su integridad personal y/o bienes, por razón de actos que se susciten en el marco del conflicto armado interno, tales como actos terroristas, combates, ataques y masacres entre otros.

En orden de lo anterior el artículo 46 de la ley 418 de 1997, modificado por el artículo 18 de la ley 782 de 2002 consagra que *“Las víctimas que sufrieren una pérdida del 50% o más de su capacidad laboral calificada con base en el Manual Único para la calificación de invalidez, expedido por el Gobierno Nacional, tendrán derecho a una pensión mínima legal vigente, de acuerdo con lo contemplado en el Régimen General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, siempre y cuando carezcan de otras posibilidades pensionales y de atención en salud, la que será cubierta por el Fondo de Solidaridad Pensional a que se refiere el artículo 25 de la Ley 100 de 1993 y reconocida por el Instituto de Seguros Sociales, o la entidad de naturaleza oficial señalada por el Gobierno Nacional”*.

El inciso 2º del artículo 46 de la ley 418 de 1997, modificado por el artículo 18 de la ley 782 de 2002, estableció los siguientes requisitos para acceder a la pensión para víctimas de la violencia:

- i) Acreditar la condición de víctima con ocasión al conflicto armado interno;*
- ii) Acreditar un porcentaje de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%; calificada con base en el Manual Único para la calificación de invalidez, expedido por el Gobierno Nacional*
- iii) Demostrar que el beneficiario de la prestación carece de cualquier otra posibilidad para acceder a una pensión y de atención a salud.*

El decreto 600 de 2017, en su artículo 2.2.9.5.3 amplía los requisitos para tener derecho a la prestación humanitaria periódica para las víctimas del conflicto armado, consagrando como tales los siguientes:

ARTÍCULO 2.2.9.5.3. Requisitos. Las personas beneficiarias de la prestación humanitaria periódica para las víctimas del conflicto armado deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- 1. Ser colombiano;*
- 2. Tener calidad de víctima del conflicto armado interno y estar incluido en el Registro Único de Víctimas - RUV;***

3. Haber sufrido pérdida del 50% o más de la capacidad laboral, calificada con base en el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional, expedido por el Gobierno Nacional;

4. Existir nexo causal de la pérdida de capacidad laboral con actos violentos propios del conflicto armado interno;

5. Carecer de requisitos para pensión y/o de posibilidad pensionar;

6. No debe percibir ingresos por ningún concepto y/o mensuales iguales o superiores a un (1) salario mínimo legal vigente;

7. No ser beneficiario de subsidio, auxilio, beneficio o subvención económica periódica, ni de otro tipo de ayuda para subsistencia por ser víctima;

Partiendo de lo mencionado resulta atinada la solicitud del Ministerio del Trabajo respecto a que se oficie a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad de Víctimas, pues según la normativa en cita es necesario demostrar y tenerse por acreditado dentro del proceso respecto a lo solicitado en calidad de víctima del conflicto armado interno y estar incluido en el Registro Único de Víctimas, así como el nexo causal de la pérdida de capacidad laboral con actos violentos propios del conflicto armado interno, los cuales se afirma ocurrieron según lo descrito en la demanda el 20 de octubre de 1984.

Ahora, el argumento esgrimido por la A quo para negar el decreto de pruebas relacionado con el hecho de que la parte que solicitó la prueba de oficio no había solicitado la misma a través de derecho de petición ni había probado al menos sumariamente haberlo solicitado al tener de lo consagrado en el artículo 173 del C.G.P, para el caso en concreto considera la Sala merece una mirada y tratamiento especial respecto a lo estipulado en dicha normativa, pues es claro que como el Ministerio del Trabajo no es parte dentro de los hechos ocurridos en el año 1984, dicha entidad se veía impedida para solicitar cualquier información relacionada con los mismos, y sería por orden judicial como la que se pueda impartir al interior del presente proceso, que la Fiscalía General de la Nación pueda allegar dicha información con la finalidad de tener los elementos de prueba suficientes que permitan al juzgador determinar si efectivamente existió el nexo causal de la pérdida de capacidad laboral con actos violentos propios del conflicto armado interno en los hechos ocurridos en el año 1984.

En virtud de lo anterior considera la Sala que la decisión de primera instancia debe ser REVOCADA y en su lugar ORDENAR al a quo, que decrete las

pruebas solicitadas por la Nación, Ministerio del Trabajo respecto a los oficios solicitados dirigidos a la fiscalía general de la Nación y la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, conforme lo pretendido en la contestación de la demanda presentada por dicha entidad.

Sin costas en esta instancia.

EL FALLO DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, EN SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la providencia impugnada de fecha y origen conocidos, proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín respecto a la negación del decreto de pruebas al Ministerio del Trabajo, y en su lugar, se ORDENA al a quo, que decrete las pruebas solicitadas por la Nación, Ministerio del Trabajo respecto a los oficios solicitados dirigidos a la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, conforme lo pretendido en la contestación de la demanda presentada por dicha entidad.

SEGUNDO: Déjese copia de lo resuelto en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, devuélvase el expediente al Juzgado de procedencia.

TERCERO: Sin costas en esta instancia.

CUARTO: La presente decisión se notificará por ESTADOS.

Los Magistrados,



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



JUAN DAVID GUERRA TRESPALACIOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
– SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 209 del 05 de
diciembre de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>